



El descontento y la represión

Aunque los discursos oficiales hablan de la prosperidad y el bienestar, durante los dos últimos años en el país se han incrementado las expresiones de conflicto y de descontento entre una mayoría de población que no ha visto cambios sustantivos en sus condiciones de vida. No se trata de simples transgresores de la ley, delincuentes o resentidos opositores, como se los ha querido calificar. Se trata de ciudadanos descontentos e insatisfechos con la situación del país y con la gestión de gobierno que tienen todo el derecho de expresar su malestar.

Sin embargo, casi desde el inicio de su gestión presidencial, Daniel Ortega ha privilegiado el control, la intimidación y la represión como métodos de tratamiento al descontento y la protesta. Esas acciones se han incrementado y agudizado durante los últimos dos años, con la abierta participación de grupos para-partidarios al frente de las acciones represivas e intimidatorias, y la complacencia de la Policía y el Ejército frente a estas actuaciones.

Lo peligroso de este tipo de situaciones es que empuja a los ciudadanos a manifestar su descontento por vías no institucionalizadas, puede desatar una espiral de violencia no deseada y está dando vida al esperpento del paramilitarismo, con nefastas y conocidas consecuencias.

Conflictos y participación en el pasado reciente

El nivel de violencia de los conflictos sociales y políticos disminuyó drásticamente en el país desde la segunda mi-



dad de los 90, luego los intensos años de la transición a inicios de los 90 y de los ciclos de violencia y rearme de excombatientes de esa época. Esos conflictos fueron protagonizados por diferentes actores y en función de diferentes demandas dependiendo de la época. Pero pasaron de planteamientos estrictamente políticos a inicios de los 90, a demandas y reivindicaciones sociales a mediados del 2000.

Por ejemplo, hasta el año 1995 las acciones de protesta y las expresiones de conflicto estuvieron protagonizadas por actores y organizaciones vinculadas con el FSLN y el recién finalizado proyecto de la revolución. Sus principales demandas giraban en torno a la seguridad, la estabilidad, el aseguramiento de espacios de poder, y los beneficios de reinserción para el enorme ejército de

ex combatientes desmovilizados. Esos años fueron de conflictos y violencia generalizada y extrema.

Durante los años posteriores, si bien los conflictos y la violencia no desaparecieron, los actores sociales pasaron gradualmente a utilizar otro tipo de acciones políticas para plantear sus demandas e intereses, los cuales también variaron. En la mayoría de los casos, se trataba de acciones cívicas y dentro del marco de la ley. Emergieron nuevos actores y se ampliaron las demandas. Algunos de los nuevos actores fueron los gremios y sindicatos, los estudiantes, los gobiernos y organizaciones locales, y otra diversidad de actores de sociedad civil. Las demandas giraban en torno al impacto de las medidas económicas y de ajuste estructural que se estaban aplicando en el país, pero también se

referían a la autonomía, el desarrollo y la participación local.

La enorme presión social fue dando vida a un sistema institucionalizado de participación a finales de los 90 que, a pesar de sus muchas deficiencias y de su propósito instrumental por parte del Estado, ofrecía márgenes para la protesta, la canalización del descontento y la participación social. Eso permitió que el recurso de la violencia se redujera sensiblemente y se expresara solamente en casos relevantes.

El tipo de tratamiento que se daba a estos conflictos era oscilante. A veces se accedía a negociar con los actores mientras que en otras ocasiones se respondía con la represión abierta como en el caso de las protestas estudiantiles reclamando el 6 % del presupuesto para las universidades. Las acciones de respuesta estatal estaban acompañadas de un discurso que estigmatizó y desmovilizó cierto tipo de acciones políticas. Más adelante, el sistema de participación ciudadana diseñado durante el gobierno de Enrique Bolaños tenía como principal instrumento la ley específica y permitía a una variedad de actores y organizaciones sociales su participación en numerosos y variados espacios, especialmente a nivel local. La intención no era propiamente abrir verdaderos espacios de participación, sino mediatizarla, pero el resquicio abierto fue bien aprovechado por los actores sociales y lo cierto es que permitió canalizar un mínimo de demandas e intereses sociales. Esta situación cambió significativamente a partir del 2007 con la llegada al gobierno de Daniel Ortega.

Participación controlada y nuevos conflictos

Precisamente uno de los cambios más importantes promovidos por el gobierno Ortega se expresó en las relaciones entre Estado y sociedad civil. Desde el gobierno se promovió la organización de los entonces llamados CPC y un modelo de democracia directa que intentaba sustituir al sistema de participación anterior. Para ello han organizado estructuras organizativas pro gobierno, basadas en el clientelismo, controladas verticalmente desde



la presidencia y dirigidas a controlar y contener por todos los medios posibles cualquier posibilidad de disenso y descontento social. Desde el inicio del gobierno Ortega se utilizaron métodos de represión e intimidación, además que se cerraron espacios a actores y organizaciones independientes y críticas.

Las acciones se dirigieron especialmente contra los medios de comunicación independientes, como en el caso de Cinco, el movimiento de mujeres y todas las organizaciones que trabajaban promoviendo la democracia y la gobernabilidad en el país. Tampoco aceptó otras formas de participación como las protestas o manifestaciones cívicas, las cuales fueron reprimidas abiertamente por sus grupos de simpatizantes.

Otro mecanismo utilizado por el gobierno para frenar la participación ciudadana, especialmente aquella relacionada con el fortalecimiento del proceso democrático y la gobernabilidad, fue reducir los fondos de cooperación destinados a estos rubros, para lo cual presionó y condicionó a diferentes agencias de cooperación internacional, de tal manera que éstas suspendieron la entrega de fondos a organizaciones independientes y no partidarias. En algunos casos, el gobierno mostró una actitud abiertamente agresiva y hostil hacia algunos donantes ocasionando su retiro del país.

En ese contexto, pero sobre todo, con esa voluntad gubernamental, inevitablemente el campo de los conflictos se trasladó rápidamente al plano político y en algunas coyunturas han alcanzado altos espirales de violencia como en el caso de las campañas electorales desde el 2007 hasta la fecha. Especialmente violentas fueron las campañas por las elecciones municipales del 2008 y las presidenciales del 2011 que han tenido como resultado numerosos muertos y heridos, especialmente en las zonas rurales del norte del país, escenarios de la guerra durante los años 80. El principal reclamo en esta nueva ola de conflictos se ha enfocado en la demanda de democracia y derechos políticos de los ciudadanos y sus actores han sido diversas organizaciones agrupaciones de ciudadanos y algunos partidos políticos.

Sin embargo, durante los dos últimos años comenzaron surgir otro tipo de conflictos vinculados más con aspectos sociales y con señales de descontento respecto a la gestión de gobierno. Su origen no es político, pero se ha politizado por el tratamiento discursivo así como por las acciones de control y represión con que los ha manejado el gobierno.

Paz, conflictos y represión

Uno de los discursos más recurrentes del gobierno Ortega desde el 2007 ha sido el de la paz, el amor y



la reconciliación de la familia nicaragüense. De hecho, se han creado grandes campañas mediáticas alrededor de estos mensajes y se ha promovido su adopción entre los partidarios del gobierno. En la actualidad es prácticamente imposible encontrar un simpatizante gubernamental sin una camiseta con estos lemas. Pero en la práctica, la actitud del gobierno respecto a los que disienten, los que piensan diferente y los que se deciden a expresar abiertamente su opinión, está bastante largo de las consignas que alimentan sus discursos.

A lo largo de las dos administraciones de Ortega se ha reprimido con violencia las expresiones de descontento, las protestas y manifestaciones pacíficas de ciudadanos que desean mostrar su desacuerdo con el gobierno. Pero además, a todo aquel que no participa en los espacios y actividades de apoyo al gobierno se le señala como desafecto y se le cierran oportunidades.

El gran problema es que la ola de descontento y desencanto con el gobierno se ha venido incrementando durante los últimos dos años, según lo demuestran las encuestas de opinión, y se están generando conflictos sociales que tienen que ver con las precarias condiciones de vida y la cotidianidad de la gente. Esa es una verdad que el gobierno ya no puede ocultar ni tam-

poco acallar como hizo en los primeros años. De tal manera que ha optado por la intimidación, la represión y el control político para tratar de sofocarla.

Algunos de los conflictos sociales más relevantes del último año se relacionan con los daños causados a comunidades por la explotación minera, como en el caso de Santa Pancha y Santo Domingo; la entrega de pensiones a los ancianos jubilados y la protesta de los jóvenes conocida como OcupaInss; y más recientemente la protesta de ciudadanos por la imposición del pago electrónico para el transporte público y su funcionamiento ineficiente por parte de la empresa MPeso. Todos estos conflictos son expresiones de descontento social que se conecta con lo político porque los ciudadanos han decidido hacer uso de sus derechos ciudadanos y políticos a la libre manifestación y protesta cívica para expresarlo, pero no porque fueran promovidos por grupos de oposición política más definidos, o porque tuvieran la intención de oponerse al gobierno, tal como se ha querido argumentar desde el oficialismo para descalificarlos.

A estas expresiones se suma ahora la existencia de grupos armados en la región norte-central del país conformados por campesinos descontentos. Los llamados de atención y alertas emitidos por una parte de jerarquía católica y por pobladores de las loca-

lidades afectadas desde hace varios meses atrás fueron desoídos y negados tanto por el gobierno como por el ejército; sin embargo, ya evidencias claras y es prácticamente imposible negar su existencia. Por otra parte, es contradictorio que mientras el alto mando militar niega reiteradamente la existencia de tales grupos, por otra parte acepta que sí existen afirmando que son delincuentes. Y más contradictorio aún es que organicen operativos conjuntos entre Policía y Ejército para combatirlos con muertos de ambos lados como consecuencia. A esta situación se agregan los violentos conflictos entre comunidades indígenas, colonos y mafias madereras en las zonas protegidas y de reserva cercanos a la región norte-centro del país.

Estos conflictos demuestran que efectivamente están emergiendo gradualmente focos de descontento social que ya no pueden ser controlados efectivamente por el gobierno y tampoco se pueden desactivar con la represión abierta. En ese sentido, una salida equivocada sería endurecer las acciones y cerrar definitivamente los espacios de diálogo; sin embargo, las señales que ha emitido el gobierno parece que van precisamente en esa dirección al re-partidizar a la policía y el ejército; y, dando vida a grupos pro gobierno que actúan con violencia e impunidad.

La incubación de un monstruo

Para no hacer pagar a la policía y el ejército el alto costo político que significa reprimir abiertamente, desde el 2007 el gobierno ha venido organizando diferentes grupos de simpatizantes y partidarios a los cuales ha procurado recursos estatales para que operen como fuerzas de choque en contra de los grupos ciudadanos que se atreven a salir a la calle para protestar y manifestarse públicamente.

Estos grupos pro gobierno han pasado por varios momentos y operan de distintas formas que van desde los “camisas azules” organizados para “proteger” a la pareja presidencial en actos públicos, los grupos de pandilleros que actuaron con abierta impunidad durante los primeros años del gobierno Ortega, hasta llegar a los grupos organizados y encapuchados que realizaron la represión contra los jóvenes y ancianos de OcupaInss, ejecutaron el desalojo de los comerciantes informales en el mercado de mayoreo y reprimieron a los protestantes contra la ineficiencia de la empresa MPeso.

Cualquiera podría argumentar que los simpatizantes del gobierno tienen todo el derecho de salir a la calle a manifestarle su apoyo igual que lo tienen los ciudadanos descontentos; sin embargo, quienes participan en estos grupos son convocados, organizados y avituallados por el gobierno y el partido de gobierno, se les asigna la tarea específica de intimidar y reprimir manifestantes pacíficos, y actúan con impunidad, e incluso complacencia de parte de la policía y las demás instituciones de administración de justicia. A pesar de que se han aportado fotografías, videos y muchas otras pruebas de la participación de personas específicas en este tipo de actos que incluyen robo de bienes materiales, agresiones, lesiones, amenazas y violencia organizada, ninguno de los involucrados ha sido investigado ni mucho menos, procesado judicialmente.

Varios riesgos importantes se esconden detrás de estas acciones y grupos. Tal vez el más importante de ellos se refiere a que gradualmente estos grupos pro gobierno han venido suplantando las funciones de la policía en la calle y se han investido ilegalmente de una autoridad que no les corresponde para el ejercicio



de la fuerza y la autoridad. Este es un grave precedente que lesiona a la institución policial no sólo en el corto plazo, sino que le quita el privilegio del uso de la fuerza como institución estatal.

El segundo riesgo es que al organizar estos grupos, el gobierno está creando un pequeño Frankenstein que se puede salir de su propio control en el momento menos pensado, y que es capaz de escalar altos niveles de violencia. Si este engendro se sigue alimentando no es extraño que en futuro inmediato se conformen grupos paramilitares como los que existen en Honduras, o en Colombia, para citar el caso más grave.

Un tercer riesgo se encuentra en la probabilidad de que la actuación de estos grupos genere entre los ciudadanos una respuesta con el mismo tono de violencia con que son intimidados y reprimidos. Como la historia lo ha demostrado tantas veces en tantas partes del mundo, las acciones represivas pueden provocar miedo en el primer momento,

pero su uso sistemático termina generando resistencias entre las personas y en la mayoría de los casos, respuestas en el mismo tono.

Seguramente la sociedad nicaragüense no desea enfrentarse a ninguno de estos riesgos pues en las familias todavía hoy es frecuente escuchar las historias de lo significó la guerra, la polarización y los conflictos para cada una de ellas. Fue el autoritarismo y la imposición lo que alimentó a la contra y fue el rechazo a la violencia y a la guerra lo que llevó a la mayoría de los nicaragüenses a votar en contra del proyecto de la revolución en 1990 dando lugar a una extensa y rica experiencia de pacificación y mediación de conflictos en el país. Intentar controlar el descontento con la intimidación y la represión es repetir de nuevo el mismo error del pasado, ¿está dispuesto el gobierno Ortega a asumir ese costo?, ¿está dispuesta la sociedad nicaragüense a pasar nuevamente por esa dolorosa experiencia?